**Informe conjunto sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Americas**

**Cuestionario elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

Mayo de 2019

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le invita a compartir información sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en las Americas. La información recopilada a través de este cuestionario contribuirá al informe conjunto de ACNUDH y la CIDH sobre el tema, el cual se presentará a fines de 2019.

Este informe estará disponible públicamente en la [página web del ACNUDH](https://www.ohchr.org/EN/Countries/LACRegion/Pages/CallInputsReportOHCHRInterAmericanCommision.aspx), y en el sitio web de la CIDH.

Sus respuestas se harán públicas y se le atribuirán en el informe a menos que indique lo contrario. Se ruega que, cuando sea posible, limite la respuesta a cada pregunta a 500 palabras.

 Se invita a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad civil y defensoras/es de derechos humanos a enviar sus respuestas en formato Word por correo electrónico a adesouza@ohchr.org con una dirección en la que puedan recibir respuesta a sus envíos en caso de ser necesario. Para este propósito, está disponible en la web de la ACNUDH una versión descargable del cuestionario en inglés, francés y español.

El plazo final para enviar el cuestionario debidamente completado será el **10 de junio de 2019.**

Por favor, proporcione sus datos de contacto en caso de que necesitemos comunicarnos con usted en relación con este cuestionario. (Téngase en cuenta que esto es opcional)

* Nombre de la organización/institución: **Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria.**
* Contacto y correo electrónico: teresita.gaviria@hotmail.com
* País o sub-región (indique el país o sub-región en el que trabaja): Colombia – Antioquia – Medellín.
* ¿Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución?

Si, autorizo para que se haga la socialización del cuestionario.

**Preguntas:**

* **Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos:**

**¿Cuáles son los factores contextuales –positivos y/o negativos- que han tenido mayor impacto en la situación de las/os defensoras/es en su país y/o en la región desde 2016?**

En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo estableció que durante el 2018 ocurrieron 172 homicidios de personas que defendían los derechos humanos, un caso cada dos días; 158 ocurrieron contra hombres y 14 casos contra mujeres, todos conservando siempre los mismos porcentajes, patrones de sistematicidad y concentrándose focalmente en los departamentos de Cauca (35), Antioquia (24), Norte de Santander (18), Valle del Cauca (14), Caquetá (11), Putumayo (11), Meta (10), Nariño (7), Chocó (6), Arauca (5) y Córdoba (5). Antioquia y Cauca siguen siendo los departamentos con mayor número de líderes asesinados. Los sectores más atacados son el comunal, comunidades indígenas, campesino, afrodescendiente, ambiental, restitución de tierras y de retornos líderes y beneficiarios del programa de sustitución, siendo los grupos paramilitares y desconocidos los principales responsables.

Desde finales del año 2016 se da nuevamente inicio al ascenso en forma de proporciones y picos progresivos, de 16% aumenta al 24% y en 2018 alcanza un crecimiento del 82% con respecto al 2017.

Los principales acontecimientos que se vivieron en estos años con mayores agresiones en los años 2013 y 2015 fueron las intensas movilizaciones sociales del sector de las y los campesinos, los cultivadores de arroz, el Paro Cívico Cafetero Nacional, Dignidad Papera, los mineros ancestrales, camioneros, indígenas, y otras intensas movilizaciones exigiendo la salida negociada y política al conflicto social y armado que ha atravesado al país desde los años 2013, 2014 y 2015, así mismo, el año 2018 el descontento ciudadano invoca al crecimiento e intensidad de la movilización social de diversos sectores.

**Cifras comparativas de agresiones en Antioquia 2010-2018**

La línea de tiempo muestra la escalada de las agresiones para el departamento en proporciones año a año desde el 2010 en adelante, con unas cifras del 52%,124%, 30% hasta el 2013 respectivamente, y experimentando desde entonces un leve descenso hasta el año 2015.

(Fuente: Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia, Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad).

**Las cifras generales en Antioquia 2018**

.

La dimensión de los asesinatos contra las y los defensores de derechos humanos en Colombia no tiene precedentes en ningún país del mundo, un exterminio generalizado y sistemático que deja en Antioquia, 31 homicidios; tan solo este departamento supera con estas cifras a países enteros como Venezuela, Honduras, Guatemala y la India, y se acerca en un digito a Brasil, un país de 210 millones de habitantes.

En una menor medida se siguen presentando agresiones que dificultan la labor del movimiento de derechos humanos en el departamento y el país, tales como: amenazas colectivas (21), hostigamientos colectivos (14), detenciones arbitrarias (12), señalamientos (9) y hurto de información (6), que siguen en el escenario de factores comunes de agresión, pero se llama la atención frente a tres hechos de desaparición forzada que se presentaron en el año 2018. En primer lugar el caso de José Herrera, fue desaparecido el 20 de marzo del 2018, líder campesino cofundador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca y Marcha Patriótica; se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Mesetas del corregimiento Puerto Valdivia y era uno de los voceros municipales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos y la implementación de estos; fue encontrado a orillas del río Cauca varios días después. El segundo caso ocurrió el 4 de mayo del 2018 en el municipio de Envigado, con la desaparición de la lideresa Mónica Janeth Castro Rodríguez, de 38 años de edad, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Obrero; desde entonces se desconoce su paradero. Y el tercer caso ocurrió en el municipio de Peque el día 5 de septiembre del 2018 contra la lideresa Leidy Juliet Correa Valle de 25 años de edad, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guayabal de Pená; según datos oficiales fue encontrada sin vida en una fosa al interior de su propiedad bajo signos de tortura.

Como tal, el fenómeno y la naturaleza de la desaparición forzada es la forma más extrema de la violencia que combina privar de la libertad, reducir, ocultar a la víctima, torturarla física, psicológica y dejarla fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018, p.30).

Con el observatorio logramos identificar que 282 casos ocurrieron contra hombres, 121 contra mujeres, 64 colectivas y 3 casos en los que resultaron afectados defensores de la población LGTBI.

En este marco de señalamiento y agresión contra los y las defensoras de derechos humanos, se evidenció que las agresiones contra ellas se incrementaron en un 83%. Estas agresiones elevan el riesgo hacia su integridad sexual, física y psicológica por su condición de género, y por extensión, el riesgo se traslada al entorno familiar. Así mismo, debido a los índices de violencia intrafamiliar que afectan mayoritariamente a las mujeres, y el riesgo de agresión al que están expuestas por el liderazgo en sus comunidades, ni los hogares, ni lo público en relación a la participación de ellas, les proporcionan entornos positivos para mejorar su condición histórica de discriminación por razones de género.

El intento por silenciar los espacios de participación es evidente, sin distingo de género o sexo, la brutalidad del agresor se concentra en la amenaza y condena al destierro. Para el caso de las lideresas comunales existe un aumento del 429% en las amenazas y el desplazamiento forzado. Este crecimiento desproporcionado en la agresión conlleva una afectación directa sobre la dignidad de las mujeres, su sentido de humanidad, el derecho a ejercer sus liderazgos, así como a vivir una vida libre de violencias.

En ellas, más que cifras, es la lectura de los fenómenos y los patrones. En materia de la afectación al derecho a la vida, disminuyen los asesinatos (de 4 a 2 casos), pero aumentan la desaparición forzada y las amenazas directas de los victimarios.

Las agresiones ocurren en zonas urbanas y rurales, pero principalmente en los lugares que la mujer busca y se abre espacios para participar. El Valle de Aburrá, zona céntrica de poder, la fuerte presencia de por lo menos 350 bandas al servicio o funcionales a supraestructuras de corte paramilitar han copado todos los espacios de los barrios, de la sociedad y ello contrastado con las realidades del día a día indican un escenario poco favorable para acción de liderazgo debido al riesgo que representa para las mujeres el control militar sobre los territorios, afectando sus derechos civiles y políticos. En el Bajo Cauca la confrontación armada también cierra espacios propicios para que las lideresas asuman el papel defensor y la participación comunitaria, las cifras así lo demuestran, sin embargo, también las discriminaciones culturales y los imaginarios sobre la participación de ellas cierran posibilidades de que se consoliden las prácticas de inclusión de las mujeres para la transformación de la sociedad.

Fuente: Observatorio del Nivel de riesgo a la labor de defensores, líderes y lideresas en Antioquia (Fundación Sumapaz, Corporación Jurídica Libertad).

**¿Cuáles son las principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de violencia y vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos?**

Son innumerables las causas y /o situaciones de riesgo para los defensores, defensoras y líderes sociales en Antioquia y Colombia, ya que hay una violencia extrema y generalizada desde los territories Rurales y Urbanos.

Es inconcebible que la vulneración de los derechos humanos de Defensores,Defensoras, líderes ,lideresas sociales, lideres comunitarios, campesinos, periodistas, indígenas , afrocolombianos, mujeres defensoras de los derechos humanos y de quienes defienden los derechos de la población LGBTI que a pesar de las adversidades persisten en la lucha por la defensa de los derechos Humanos.

Pero mas preocupante e que en Colombia estos delitos no son visibles debido a que **persiste la impunidad.**

**¿Cuáles son los principales avances y puntos fuertes de su país o en la región en la protección y promoción del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y cuáles son los principales retrocesos y retos/desafíos?**

En Colombia se han logrado algunos avances en materia de seguridad y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos humanos, pero sigue la criticidad frente a los asesinatos de los mismos.

**¿Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos?**

Es necesario que la Normatividad Nacional que está dedicada y que ampara la defensa de los derechos humanos y que garantiza una efectiva protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia y en Colombia, sea implacable con quienes actúan en contra y coaccionan los procesos sociales de los defensores y defensoras de los derechos Humanos en nuestro país.

Hay muchas leyes, documentos y herramientas de exigencia frente a la vulneración de derechos humanos, pero su efectividad no es aplicada.

**Defensores/as en mayor situación de riesgo:**

**¿Cuáles son los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo? Por favor, explique la diferente naturaleza de los riesgos a los que se enfrentan las mujeres defensoras, integrantes de pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos.**

El año 2018 fue uno de los de más alta agudización en las agresiones, 470 en total, de las cuales el 60% fueron amenazas individuales; 282 contra hombres líderes, 121 contra mujeres lideresas, 3 contra líderes, lideresas y población LGTBI.

Más de la mitad de este porcentaje ocurrió en el Bajo Cauca, lo que representa un incremento del 249% con respecto a la misma categoría ocurrida durante el año 2017 de un fenómeno que busca también silenciar e impedir la labor de las y los defensores.

36 núcleos familiares de líderes y lideresas fueron desplazados forzadamente de sus territorios y obligados a abandonar todas sus labores, sus proyectos de vida, su cotidianidad, sus costumbres, su cultura, toda la dimensión y la complejidad de sus realidades, de su territorio y territorialidad. Las víctimas de este crimen provienen del Bajo Cauca y Norte del departamento.

64% de las agresiones en el Valle de Aburrá consisten en el fenómeno de la amenaza como la más predominante, 5% agresiones colectivas, 4% detenciones arbitrarias, 4% hurto de información, 4% desplazamiento forzado de líderes y lideresas, entre otras.

En el Urabá se presentaron 24 casos de amenazas individuales, 13 amenazas colectivas, 11 casos de hostigamientos colectivos, 3 casos de censura, 2 homicidios, entre otras variables. En el contexto y el nivel de riego la Defensoría del Pueblo la retrata claramente en la alerta AT 048-18 donde encontramos varios elementos. En primer lugar, luego 3% 3% 3% 5% 18% 22% 40% Agresiones Urabá 2018 Empadronamiento Espionaje Persecución judicial Hostigamiento individual Señalamiento colectivo Homicidio Censura Hostigamiento colectivo de la desmovilización de las AUC y las ACCU entre los años 2003 y 2006, otros grupos se sucedieron y evolucionaron hasta lo que hoy se conoce como AGC quienes controlan política, territorial y económicamente gran parte de este territorio bajo la estructura central Juan de Dios Usuga, y en segundo lugar, se conoce de la presencia de un grupo armado ilegal que se autodenomina “Los Empresarios” y que opera en Chigorodó, Apartadó, Necoclí, San Juan y Turbo, donde tienen fuerte control territorial y al parecer tendrían alguna relación directa con las AGC o es una estructura de las mismas AGC. Esta presencia ha significado desplazamientos y homicidios de líderes o personas de comunidades indígenas, afros y campesinas e intimidaciones a sectores relacionados principalmente con la restitución de tierras.

El 60% de las agresiones ocurridas en el Norte de Antioquia fueron amenazas individuales, el 20% homicidios, 6% desplazamientos forzados individuales, 4% señalamientos colectivos, entre otras modalidades. Al igual que en el Urabá, en el Norte de Antioquia es claro el cerco y la avanzada de las AGC que hacen fuerte presencia, junto a otras estructuras que buscan controlar este territorio estratégico.

Occidente es una zona que se caracteriza por ser una subregión en la que las y los defensores de derechos humanos han sido silenciados por el miedo y el control supremo de estructuras funcionales a las AGC, a la Oficina del Valle de Aburrá y otras figuras de características paraestatales (CCEEUU, et al., 2017). En la subregión del Occidente ocurrieron 28 agresiones contra defensores de derechos humanos. El 25% fueron amenazas individuales, 21% heridos, 21% detenciones arbitrarias, 11% desplazamientos forzados.

**Respecto los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo, ¿ve algún cambio desde 2016?**

Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas (PAO)

El plan bandera del estado colombiano para proteger a líderes es el PAO. Esta medida se caracteriza por estar totalmente lejana a planes de prevención de agresiones contra las y los defensores, es además, distante a las realidades de las comunidades, sus contextos, los factores y los escenarios de riesgo, en esencia, es netamente militarista bajo toda la línea de la política de defensa y seguridad, esa misma política de la doctrina de seguridad democrática que esta hartamente probado que convirtió al Estado en un sangriento victimario. El PAO como tal, no genera las condiciones mínimas de confianza en el movimiento social, no garantiza la participación de las y los defensores, no posee el enfoque de derechos, mantiene la estrategia estatal del enemigo interno lo que indica el desconocimiento, tal vez adrede, de otros factores de riesgo que no solucionan el actual exterminio de las y los defensores de derechos humanos. A manera de conclusión: “No son números, son vidas humanas y libertades que se pierden” así fue expresado y con gran preocupación Alberto Brunori Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, haciendo alusión a la vida de las y los defensores de derechos humanos que se pierden cada vez que ocurre un homicidio contra estos (Brunori, A., 29 de junio de 2018).

En 2018 creció la arremetida contra activistas y líderes sindicales La situación de derechos humanos en Colombia deja un balance crítico, a juzgar por lo ocurrido durante el año 2018, en el que se agudizó la persecución y la violencia contra quienes defienden derechos, ejercen algún liderazgo o activismo social, comunitario y organizativo (Indepaz, 2018). i Es necesario precisar que en medio de este panorama creció la violencia letal contra sindicalistas y la arremetida se focalizó principalmente contra la dirigencia y el activismo sindical. Por su parte, la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2018 enfatiza que Colombia se mantiene como el quinto peor país del mundo para las trabajadoras y los trabajadores, y con una cultura fuertemente enraizada de violencia e impunidad, sigue siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas (Confederación Sindical Internacional, CSI. (2018).

**¿Cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que enfrentan las/os defensoras/es en materia de protección cuando realizan actividades tanto en la esfera pública como en la privada, incluso a través de medios digitales?**

Los desafíos que a diario tienen que enfrentar los defensores y las defensoras de derechos humanos en nuestro territorio ha sido muy riesgoso el realizar el trabajo social y comunitario con las comunidades más apartadas en donde la seguridad está pactada con otros agentes en el territorio y estos tienen en un grado de sometimiento a las comunidades más vulnerables y que no han tenido el acceso y el beneficio de las ofertas institucionales; y por ende estos se encuentran en un grado de vulnerabilidad manifiesta frente al control territorial por grupos al margen de la Ley.

En otros sectores urbanos y en las grandes ciudades se torna la problemática más visible, ya que la población ha emigrado de lugares en donde el conflicto afecto de manera directa a la población y especialmente a los líderes sociales, defensores y defensoras de Derechos humanos, líderes comunales y líderes étnico.

 Los medios de comunicación alternativos han jugado un papel importante, frente al tema de denuncia, ya que los líderes que se encuentran desarraigados pueden manifestar sus vulneraciones, pero a la vez es un mecanismo que se convierte en la punta del iceberg, ya que puede llegar información a quien no se debe, o sencillamente ser intervenida y manipulada.

* **Agresiones y restricciones:**

**¿Cuáles son las cifras más actualizadas de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o región? Por favor, señale la fuente de información e indique el periodo que abarca.**

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías presentaron ayer el [Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en Antioquia, 2018](http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/wp-content/uploads/2019/03/Informe-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-las-y-los-defensores-de-derechos-humanos-en-Antioquia-2018.pdf). Este plantea que el año pasado se registraron al menos 470 agresiones, en comparación con 248 descritas en el informe del año 2017.Según el Informe, en el Valle de Aburrá se presentaron 99 agresiones, sobre todo en los municipios de Barbosa y Medellín, equivalentes a un 33%. Le siguen Bajo Cauca (32%), Urabá (13%), Norte (11%), Occidente (6%), Nordeste (3%) y en menor escala el resto de subregiones. Cabe resaltar que en Bajo Cauca y Norte fue donde más homicidios se registraron: 13 y 10, respectivamente.

Los agredidos, en muchos casos por ejercer su derecho a la denuncia y la protesta, identificaron como principal victimario a grupos paramilitares, como las AGC y los ‘Caparrapos’, en 326 casos. En el resto de casos, los responsables serían grupos guerrilleros e integrantes de instituciones que estigmatizan, persiguen y judicializan a quienes lideran prácticas como la movilización social.

Esta situación humanitaria la padecen varios departamentos del país. Así lo insinúa el Informe cuando retoma cifras de la Defensoría del Pueblo para sostener que “el compendio de casos registrados entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2018 da como saldo 431 homicidios contra defensores y defensoras”. De ese total, 25% ocurrieron en Cauca, 14% en Antioquia y 7% en Norte de Santander.

Y agrega que “la Defensoría del Pueblo estableció que durante el 2018 ocurrieron 172 homicidios de personas que defendían los derechos humanos, un caso cada dos días; 158 ocurrieron contra hombres y 14 casos contra mujeres, todos conservando siempre los mismos porcentajes, patrones de sistematicidad y concentrándose focalmente en los departamentos de Cauca (35), Antioquia (24), Norte de Santander (18)”.

**¿Cuáles son los principales tipos de agresiones y restricciones contra defensoras/es en el país o región? ¿Ve algún cambio desde 2016? Si es posible, identifique si hay algún área geográfica que deba ser resaltada.**

****

**¿Podría identificar uno o varios patrones en el tipo de agresores/perpetradores? ¿Son éstos actores estatales o no estatales?**



**¿Qué tipos de agresiones afectan especialmente a mujeres defensoras (en ámbitos urbanos y rurales, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, y otros grupos)?**

El [**Observatorio de Violencia Política**](https://lideres.pares.com.co/) ha hecho **seguimiento sistemático a las acciones violentas letales y no letales que vulneran los derechos de líderes sociales**, defensores de derechos humanos, funcionarios, políticos, maestros y demás personas que a partir de su rol representan liderazgo en su comunidad.

Desde 24 de noviembre de 2016 al 15 de noviembre de 2018, se han presentado 545 casos de agresiones a líderes y [lideresas sociales](https://pares.com.co/2018/07/24/las-lideresas-asesinadas-tienen-nombre/), defensores y defensoras de Derechos Humanos; entre estos datos se registran: **274 amenazas, 200 homicidios, 56 atentados, 9 secuestros, 4 desapariciones forzadas y 2 agresiones sexuales**. Los departamentos con mayor número de homicidios contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de Derechos humanos han sido Antioquia (32), Cauca (32), Chocó (14), Norte de Santander (13) y Nariño (13).

La Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, a través de sus duplas de género, acompañó, asesoró jurídicamente y/o brindó atención psico-jurídica a 143 lideresas o defensoras de derechos humanos, de enero de 2016 a diciembre de 2017, de las cuales 24 fueron registradas como víctimas de violencia sexual (16,8%) 12. En lo que va de 2018, con corte al 13 de junio, de 34 defensoras acompañadas, 6 reportaron haber sido víctimas de violencia sexual (17,6%) 13 . Dichos ataques de pretendido carácter ejemplarizante buscan humillar y enviar un mensaje de escarmiento frente a sus comunidades, organizaciones y otras mujeres que, ante las múltiples situaciones de riesgo, renunciarían a desempeñar papeles de liderazgo en sus territorios.

* **Garantías para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos:**

Hay una marcada libertad del ejercicio del liderazgo, pero lo que no está claro es la protección y seguridad de los defensores y defensoras para ejercer su trabajo social y comunitario.

**¿Considera que hay algún aspecto del marco normativo, institucional y de políticas públicas que promueve o dificulta el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos?**

### [La Declaración sobre los defensores de derechos humanos](https://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/53/144)  (1999)

* Directiva presidencial No. 07, respaldo, interlocución y colaboración del Estado con las organizaciones de derechos humanos, 9 de septiembre de 1999.
* Ley 107 de 1994 (enero 7) por la cual se reglamenta el artículo 41 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.
* Ley 131 de 1994 (mayo 9) por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones.
* Ley 134 de 1994 (mayo 31) por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
* Decreto 895 de 2000 (mayo 18) por el cual se reglamenta la parte operativa de la Ley 134 de 1994.
* Ley 581 de 2000 (mayo 31) por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución nacional, y se dictan otras disposiciones.

**¿Ha identificado como un problema existente en su país o en la región el uso indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensoras y defensores de derechos humanos por su actividad? De ser así, indique en qué contextos ocurriría, qué actores intervienen, y cuáles serían las causas principales o los factores que la generan.**

No se han identificado problemas frente al uso indebido del derecho penal con el fin de criminalizar a defensores y defensoras de derechos humanos por su actividad.

**Si es el caso, ¿Bajo qué delitos se alega acusaciones infundadas a defensoras y defensores? De ser posible, proporcione ejemplos.**

No hay casos mencionados o conocidos en lo que refiere al tema de acusaciones infundadas.

* **Acceso a justicia y reparación:**

**¿Podría aportar información sobre el estado de investigaciones de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos?**

Creemos que es fundamental que el Estado colombiano le apueste férreamente al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, porque esto cobija de manera transversal las garantías hacia las y los defensores de derechos humanos” que continúan siendo asesinados: en lo corrido de 2019 se han registrado al menos tres casos debidamente confirmados en Antioquia.

**¿Qué medidas ha tomado el Estado para garantizar una reparación adecuada y garantías de no repetición? Haga referencia a ejemplos concretos.**

En efecto, la lectura desde esas plataformas es que las instituciones no están cumpliendo cabalmente sus funciones. Sobre la Defensoría del Pueblo, comentó que emite información valiosa a través del Sistema de Alertas Tempranas, pero hay territorios de subregiones como el Oriente, el Suroeste y el Valle de Aburrá de donde no han emitido alertas. “Eso podría indicar que hay una especie de omisión u ocultamiento de lo que está ocurriendo”.

* **Acciones preventivas y reactivas a las agresiones contra defensoras/es:**

**¿Qué medidas, normas, leyes, políticas y mecanismos han incidido positiva o negativamente en generar contextos seguros para defensoras/es de derechos humanos? ¿Conoce casos que puedan ejemplificar lo indicado?**

Sobre la Unidad Nacional de Proteccion (UNP), expresó que “son muy demorados los trámites, a pesar de las tutelas que se han ejercido al respecto”. Además, “los analistas desconocen completamente las realidades que viven los líderes y defensores de derechos humanos en los territorios y cuáles son los factores de riesgo a contemplar a la hora de definir el tipo de medida para protegerlos”.

Su valoración de la Fiscalía General de la Nación tampoco fue favorable: “Hace un ejercicio interesante”, pero no ha avanzado significativamente en la investigación y esclarecimiento de los crímenes contra líderes y defensores de derechos humanos; es decir, pocas veces ha logrado identificar a los autores materiales e intelectuales. Por eso, “hablamos de que alrededor de un 95% de los casos está en la impunidad”.

Ante ese panorama, el vocero de ambas plataformas le recomendó al Gobierno que apoye la construcción de paz, mediante la implementación del Acuerdo. Puntualmente resaltó la “cantidad de jurisprudencia”, refiriéndose a mecanismos de justicia transicional, que está siendo desconocida como medio para garantizar los derechos colectivos de las comunidades.

Incluya una evaluación sobre los mecanismos nacionales de protección a defensoras/es, si el país en el que se enfoca cuenta con estos mecanismos. ¿Cuál ha sido su alcance real y eficacia? Por favor, señale las razones para dicha valoración.

¡Gracias por su participación en este cuestionario!

Por favor, adjunte aquellos documentos que pudieran ser relevantes y de utilidad para el informe (por ejemplo, informes, casos emblemáticos). Los puede mandar por correo electrónico a adesouza@ohchr.org, así como cualquier pregunta, duda, u observaciones a este cuestionario.